



Embalse de la Serena (Badajoz)

Todo el mundo tiene un plan (hidrológico)



Antonio Martínez
Periodista agroalimentario

Los expertos en geopolítica llevan años avisando que el agua va a ser el petróleo del nuevo milenio. Quien gestione el agua tendrá el poder. Aventuran que las disputas por su posesión pueden ser el germen de guerras a lo largo de todo el globo. Puede que a un danés le suene a ciencia ficción, pero no a un español. Nosotros llevamos décadas haciendo del agua un elemento de confrontación (virulenta, pero pacífica) entre partidos políticos y comunidades autónomas. Cada partido, cada gobierno y cada comunidad tiene un plan que promete ser la solución a los problemas de la España seca. Nadie parece en disposición de sacar adelante un gran consenso nacional, al menos hasta ahora.

Miguel Arias Cañete compareció el día 1 de febrero ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. Era el momento de avanzar los planes para la próxima legislatura: negociaciones de la nueva PAC, la cadena de valor, los acuerdos con Marruecos, etc. Pero sólo un asunto de los tratados en la comparecencia logró despertar el interés de la sociedad española, el agua.

Debemos ponernos en situación. Muchos se habían olvidado, después de tres años de abundantes lluvias, que en España las precipitaciones son irregulares y se concentran en zonas muy concretas del país. La España seca no es un invento de última hora, el invierno más seco desde mediados del pasado siglo nos recuerda cual es la cruda realidad.

Vivimos en un país en el que las comunidades de la España seca se han convertido en el motor demográfico y económico y para ello necesitan un agua que no tienen. El conflicto está servido. Conflicto que se desató con toda su virulencia en el estado de las autonomías.

En medio de esta lucha, los sucesivos gobiernos han tratado de encontrar una solución más o menos de consenso para atajar el problema. Los ejecutivos del Partido Popular de José María Aznar creyeron encontrar la solución perfecta en un Plan Hidrológico que proponía un trasvase desde el río Ebro que tendría que garantizar el suministro de agua para todo el Este peninsular. Fue el plan que heredó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que inmediatamente arrumbó. El PSOE encontró una solución alternativa en las desaladoras. Sobre el papel era perfecta. El agua

se produce cerca de donde se necesita. De paso, se evitaban los costes políticos de un trasvase muy polémico. Para complicar un poco más las cosas, algunas comunidades autónomas llevaron el debate más lejos arrogándose competencias sobre las aguas de su territorio, un proceso que desembocó en un embrollo político y judicial que ha llenado portadas de la prensa durante años.

EL AGUA COMO ARMA POLÍTICA

“Todo esto es un ejemplo de que el agua no es un bien público sino un bien político. Es una herramienta que se utiliza según conviene a los partidos y, además, con un componente regional muy fuerte. Se trata de ver qué comunidad autónoma tiene más voz a la hora de decidir dónde va el agua y para qué se utiliza”. Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas de la organización conservacionista WWF en España es muy crítica con la gestión que sobre este asunto han realizado las administraciones a lo largo de los años, “no nos gusta, porque nuestra postura es defender que el agua es un bien público que se tiene que gestionar de manera que beneficie a todos”.

También los regantes y las organizaciones agrarias acusan a los políticos de haber hecho del agua un instrumento de confrontación. Andrés de Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) apunta directamente a las comunidades autónomas, “lo que no puede ser es que cada comunidad diga que se reserva para el futuro una cantidad de hectómetros cúbicos con criterios de cálculo un

EL FIASCO DE LAS DESALADORAS

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha sido especialmente crítico con la apuesta que los anteriores gobiernos hicieron por la desaladoras. Y se armó de datos: "El plan suponía la construcción de 51 instalaciones. En este momento 17 están en explotación y 15 en construcción. Se han invertido 1.664 millones de euros, y precisamos otros 762 millones de euros si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operati-

vas con una inversión de más de 2.426 millones. Las desaladoras que están operativas producen 111 hectómetros cúbicos de agua desalada, es decir, un 16,45% del total de 678 que tenían que estar produciendo en la actualidad". Pero lo más preocupante, de cara a los regantes, es sin duda el precio de esa agua a la salida de las desaladoras, "el coste de producción por metro cúbico en el caso del regadío —1,1 €/m³—, que es uno de los usos básicos previsto en el Plan de desaladoras, es muy superior a lo que pueden soportar los costos del sec-

tor, que se sitúan en 0,30 €/m³ como máximo. Por tanto, para hacer viable el uso de las desaladoras hay que acudir a una cadena de subvenciones encubiertas, porque si no los agricultores no demandan el agua de la desaladora, al no poder costear su importe". Andrés del Campo comparte plenamente el balance que hizo el ministro, "la política basada en la desalación ha tenido el problema que ya avanzamos nosotros, que el agua es tan cara que están infrutilizadas". Pedro Lencina, responsable de

Aqua de COAG y secretario general de la organización en Murcia también asume que los planes de los anteriores gobiernos no han dado los resultados que se esperaban "se ha invertido dinero en la desalación, agua que sirve para la industria, para la población pero no para la agricultura. El nuevo Gobierno está diciendo que se han gastado las perras en algo que es casi chatarra". No obstante, Lencina cree que es necesario rentabilizar toda esa inversión, "yo creo que algún aprovechamiento tendrá".

tanto *sui generis*, y que no haya agua sobrante para nadie en ninguna cuenca". El presidente de la Federación vuelve a poner una vieja reivindicación de su colectivo, "nosotros defendemos desde el primer momento una política hidráulica nacional, sobre todo en cuencas intercomunitarias y con la gestión de la administración, donde se oiga a las comunidades autónomas. Pero, si hay que imponer el orden, habrá que imponerlo. Sobre todo persiguiendo el bien común, y el bien común no es el de la comunidad autónoma, es el de todos los españoles".

Pedro Lencina, responsable de Aqua de COAG y secretario general de la organización en Murcia se queja también de cómo han gestionado este asunto los políticos, "el tema del agua es muy sensible. Toca los sentimientos de las personas en general y de los agricultores en particular. Se ha utilizado políticamente y ha habido incluso enfrentamientos, yo diría que provocados intencionadamente, entre comunidades autónomas para derivar las cosas

// MUCHOS SE HABÍAN OLVIDADO, DESPUÉS DE TRES AÑOS DE ABUNDANTES LLUVIAS, QUE EN ESPAÑA LAS PRECIPITACIONES SON IRREGULARES Y SE CONCENTRAN EN ZONAS MUY CONCRETAS DEL PAÍS. LA ESPAÑA SECA NO ES UN INVENTO DE ÚLTIMA HORA //

hacia un sitio u otro. Yo lo lamento". Lencina acusa a buena parte de la clase política de no haber sabido encontrar una solución a un problema que se ha enquistado, "he participado en nombre de COAG en el Consejo Nacional del Agua en donde somos 90 personas en total. La mayoría son políticos, que se han multiplicado con las comunidades autónomas y ha sido imposible avanzar con uno u otro gobierno. La impresión que yo tengo es que no hemos adelantado nada". Un error que podemos pagar de inmediato, "parece que hemos entrado en un nuevo ciclo de sequía, que nos ha pillado con el paso cambiado".

NUEVO PLAN HIDROLÓGICO

Es hora de volver a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 1 de febrero. Evidentemente, Miguel Arias Cañete, llevaba la lección bien aprendida y lanzó un guiño a regantes y organizaciones agrarias: "El agua supone un elemento vertebrador territorial, y como tal necesita la gestión solidaria y sostenible para cubrir las necesidades de las distintas regiones españolas. Este carácter integral y vertebrador exige una gestión unificada y coordinada. En este sentido es necesario marcar una relación jerárquica clara entre las distintas instituciones implicadas en la gestión del agua".

Una declaración de principios que se va a sustanciar en una nueva política que el ministro quiere de amplio consenso: "Abordaremos la puesta en marcha de un pacto nacional del agua. Este pacto será de larga duración y tendrá carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional. Resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo plan hidrológico nacional que contemple los acuerdos del pacto y materialice sus objetivos. Este nuevo plan hidrológico tendrá en cuenta todas las tecnologías e infraestructuras existentes, propondrá la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de manera que se asegure la suficiente gestión del recurso, el aumento de caudales en zonas con déficit hídrico, y el abastecimiento a precios razonables para cada uso".



Presa en Málaga

Andrés del Campo, no tiene más que alabanzas para los planes de Arias Cañete, “volvemos otra vez a una política más clásica que, nosotros como regantes, apoyamos porque consideramos que está más cerca de la realidad”. Es más, el propio ministro le avanzó en un primer encuentro los plazos que maneja, “nos dijo que le gustaría tener el plan hidrológico nacional terminado hacia finales de 2013. Sería ideal, pero lo vemos casi utópico, fundamentalmente por la problemática de las comunidades autónomas”.

El presidente de Fenacore trata de ser realista, “las políticas hidráulicas tienen que ser a un futuro lejano, ni siquiera a medio plazo, a largo plazo. Una obra hidráulica se proyecta en una legislatura, pero se necesita una o dos para que se inicie la obra. O sea, que son varias legislaturas las que se necesitan para que se vea concluida. Sin estabilidad y una continuidad no puede haber política hidráulica”. Le parece evidente que hace falta un gran pacto que de cobertura a esa nueva política. Ese pacto tiene que iniciarse entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Andrés del Campo empieza a ver movimientos en ese sentido que no le gustan, “se comenta que, a lo mejor, el futuro presidente de la confederación hidrográfica del Ebro es del Partido Aragonés (socio del gobierno del PP). Eso sería un gravísimo error. ¿Por qué es del PAR y no de Cataluña o de cualquiera de las otras ocho comunidades que hay en el Ebro?. Lamentablemente volvemos a tener el mismo conflicto”.

QUIÉN DICE QUÉ



EVA HERNÁNDEZ, WWF

// “En el tema de los trasvases nos atenemos a lo que dice la normativa europea. Un trasvase y una presa deben ser la última opción. Hay que recordar que España es líder mundial en presas *per capita*, tenemos unas 1.300”. //

ANDRÉS DEL CAMPO, FENACORE

// “Lo que no puede ser es que cada comunidad diga que se reserva para el futuro una cantidad de hm³ con criterios de cálculo un tanto *sui generis*, y que no haya agua sobrante para nadie en ninguna cuenca. Defendemos una política hidráulica nacional, donde se oiga a las comunidades autónomas”. //



PEDRO LENCINA, COAG

// “Se ha invertido dinero en la desalación, agua que sirve para la industria, para la población pero no para la agricultura. El nuevo Gobierno está diciendo que se han gastado las perras en algo que es casi chatarra”. //

MIGUEL ARIAS CAÑETE, MAGRAMA

// “Abordaremos la puesta en marcha de un pacto nacional del agua. Este pacto será de larga duración, tendrá carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional. Pacto nacional se dice, no se llama imposición nacional sobre el agua”. //



Pedro Lencina, por su parte, considera que el nuevo Gobierno parte con una clara ventaja, tiene una mayoría sólida y la mayor parte de las comunidades son del mis-

mo color político. Una oportunidad única “para decir a los técnicos que empiecen a redactar lo que es un plan hidrológico nacional integral”.

A VUELTAS CON LOS TRASVASES

Aquí entramos en uno de los temas que más pasiones levanta, el de los trasvases. En su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no eludió la polémica a preguntas de diputados de la oposición: “¿Pero qué pasa con las aguas excedentarias?, ¿no son utilizables en un país que no llueve lo suficiente y tiene mala distribución? En mi provincia tenemos trasvases, como el del Guadiaro, que funcionan excelentemente”. Trasvases que el ministro defendió dentro de la lógica de un pacto nacional: “¿Alguien cree que si alguien tiene aguas excedentarias en volumen se puede oponer a su trasvase? Un trasvase que también es rentable para la comunidad y para la confederación hidrográfica porque por usar el agua se pagan

Canal de Orellana (Badajoz)



cánones; es decir, que permite hacer más infraestructuras de regadío. Hagamos lo que tengamos que hacer. Hagamos las obras del Pacto de Agua en Aragón, pongamos orden en las confederaciones y hagamos ese gran Pacto Nacional sobre Agua; pacto nacional se dice, no se llama imposición nacional sobre el agua”.

Andrés del Campo, sostiene que el ministro evaluará muy detenidamente cualquier decisión en este asunto, “la opinión del ministro es que sólo habrá trasvases cuando se justifiquen técnica, económica y socialmente. Tiene que haber agua excedentaria en un sitio y que se pueda llevar a otro. Si no se superan todas esas trabas de índole técnico, social y medioambiental no habrá trasvases. Es una puerta que no hay que cerrar previamente. Donde sea posible habrá y donde no, pues no”.

Eva Hernández responsable del Programa de Aguas de WWF ve este asunto de una forma muy distinta. Echa mano de la Directiva Marco del Agua, (norma que España ha incumplido de forma sistemática, como el mismo ministro confirmó en el Congreso de los Diputados), “en el tema de los trasvases nos atenemos a lo que dice la normativa europea. Un trasvase y una presa deben ser la última opción. Hay que recordar que España es líder mundial en presas *per capita*, tenemos unas 1.300”.



NUEVOS REGADÍOS

En lo que parece que no hay dudas es en la apuesta que el Gobierno va a seguir haciendo por el regadío. Así lo confirma Andrés del Campo, “nosotros le preguntamos si iba a aprobar la famosa estrategia de sostenibilidad de regadíos que estaba pendiente de sacar adelante el PSOE y nos dijo que iba a hacer otra cosa similar que era la continuación del Plan Nacional de Regadíos para contemplar la transformación de esas 1.100.000 hectáreas que todavía faltan por transformar en nuestras zonas regables”. En este asunto, el presidente de Fenacore es tajante, “es necesari-

rio apostar por el regadío. La renta del agricultor está disminuyendo. La productividad tiene que aumentar del orden de más del 40% antes del 2030 y un 70% antes del 2050 y eso es una realidad que no se puede ignorar desde las políticas agrarias europeas”.

“¿Hace falta modernizar los regadíos en España? Pues claro que sí, porque todavía tenemos una gran superficie que se está regando a manta”, asegura la responsable del Programa de Aguas de WWF, “pero no estamos de acuerdo en cómo se está realizando. Según la normativa europea tiene que haber un ahorro efectivo de agua al final y lo que estamos viendo es que el agua ahorrada no vuelve al sistema para usos prioritarios, se destina a aumentar superficie de regadío o a duplicar las cosechas. Se está subvencionando una mejora de la eficiencia, lo que no gastas no te lo puedes quedar porque no es tuyo. Es un bien público”.

De nuevo, esta organización echa mano de la Directiva Marco del Agua para cuestionar las políticas de regadíos en España, “el agua es más barata de lo que realmente debería ser. Tampoco se ha valorado cual es el coste real. Se nos argumenta que si los regantes tuvieran que pagar el agua más cara no podrían acceder a ella. Bueno, pero habrá que evaluar cual es el precio real del agua y valorar cuanto se está subvencionado el precio a esos regantes o hidroeléctricas, térmicas o lo que sea”. Pero, como todos, piden que el proceso que ahora abre el nuevo Gobierno se asiente sobre el diálogo, “la administración tiene que aprender que la participación es una vía para reducir conflictos y encontrar soluciones compartidas. Están demasiado acostumbrados al yo digo, yo publico y tu haces alegaciones”.

EL COSTE DE LA ENERGÍA SIGUE SIENDO LA PRIORIDAD

Los planes del Gobierno sobre la nueva política del agua no estarán listos hasta dentro de unos años. Pero los regantes aseguran que no pueden esperar tanto para solucionar algunos de los problemas que aquejan al sector, en especial al coste de la energía, que se ha disparado en los últimos años. Esa fue una de las peticiones que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) llevó al nuevo ministro en su primera toma de contacto, “paradójicamente se están sembrando cultivos de secano en zonas de riego porque no se puede pagar la energía. Así es imposible amortizar las instalaciones modernizadas. Los costes energéticos ya suponen el 35% de los costes totales, lo que es una barbaridad”, según los cálculos que Andrés del Campo presentó al ministro. “Y sobre todo insistí en que con medidas específicas se podrían reducir sensiblemente. Fundamentalmente el coste del término potencia, que es un coste fijo que, se utilicen o no los motores, se paga anualmente por la potencia máxima contratada. Lo que le pedimos es que se pague por la potencia realmente utilizada”. Las quejas de Fenacore no eran nuevas para Arias Cañete, “es consciente del problema. Estando en la oposición, el PP presentó proposiciones no de ley para rebajar el IVA, como ocurre en Italia. Dijo que se volvería a estudiar todo, aunque las circunstancias económicas se habían modificado. Es consciente del problema y buscará soluciones”.

Lo cierto es que al presidente de Fenacore no le cabe duda de la implicación de Arias Cañete en este asunto, otra cosa es lo que ocurra con el equipo económico del Gobierno. Ya vivieron algo parecido con el PSOE, “no fue por falta de voluntad del anterior equipo, si no por el Ministerio de Industria. El problema estaba en Industria. Ahora, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al Ministerio de Industria?. Pienso que se tiene que encontrar una solución al problema energético, de otra forma la modernización de regadíos se hace inviable”.